

Bogotá, D.C., 3 de julio de 2020

Señores

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA

SALA ÚNICA

ATENCIÓN. DR. MARTIN FERNANDO JARABA ALVARADO

MAGISTRADO PONENTE

sgtsara1@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REF:

Acción de Tutela No. 81001310500120200006901

ACCIONANTE: CARLOS ALBERTO GUERRERO

CONTRA: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL-AEROCIVIL, POLICIA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA (UAESA), MUNICIPIO DE ARAUCA, OCCIDENTAL DE COLOMBIA L.L.C.,

VINCULADOS: MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL TRABAJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

TERCEROS CON INTERÉS: UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO (USO) A NIVEL NACIONAL y la UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO (USO) SUBDIRECTIVA ARAUCA, representante legal o propietario del Hotel CIMA REAL ARAUCA y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ACTUACIÓN: OPOSICIÓN A LA IMPUGNACIÓN

Honorable Tribunal:

JUAN FERNANDO ACEVEDO LIZCANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.409.120 de Bogotá, actuando en mi condición de Apoderado General Suplente de **OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC**, (en adelante, “OxyCol” o la “Compañía”) calidad previamente reconocida en el expediente, por medio del presente escrito me permito pronunciarme sobre el escrito de impugnación radicado por el accionante, en los siguientes términos:

I. DEL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA:

Señaló en su decisión el *a quo* que la tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Guerrero, resulta improcedente en razón a la inexistencia de la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales del accionante, en lo referente a los derechos a la salud y vida alegados, pues acertadamente la Juez de Primera Instancia advirtió que la mayoría de los hechos expuestos en el cuerpo de la acción obedecen a normas dictadas a nivel nacional y local de conocimiento público, opiniones y

divulgación de información a través de medios de comunicación nacional y local, comunicados de prensa, y apreciaciones subjetivas del accionante que no demuestran o determinan con claridad la afectación directa a sus derechos fundamentales, y mucho menos el riesgo inminente de los mismos, afirmaciones soportadas por el *a quo* en fundamentos jurisprudenciales y en las pruebas que reposan en el expediente.

En ese orden sostuvo que, de los hechos relatados por el accionante es claro que no existió ninguna conducta concreta, activa u omisiva, que haya podido derivar en una supuesta afectación de los derechos fundamentales, y en tal sentido, como acertadamente lo señaló el *a quo*, no es posible impartir órdenes para la protección del actor, o hacer un juicio de reproche a las entidades accionadas o vinculadas.

Adicionalmente, sostuvo que el accionante no demostró la afectación o puesta en peligro de los derechos fundamentales invocados, al contrario, del material probatorio recaudado evidenció que no existió soporte que evidencie la vulneración alegada y por ende que amerite la intervención forzosa del juez de tutela, pues bien lo advierte la Juez de Primera Instancia, no puede olvidarse que, si bien la acción de tutela es de carácter sumario, exige al accionante un mínimo de diligencia y responsabilidad probatoria, carga reiterada en numerosa jurisprudencia.

En ese orden de ideas, acertadamente precisó el *a quo* al indicar que no existió hecho generador de la presunta afectación, y por lo tanto mucho menos puede aducirse la vulneración o amenaza a garantía fundamental alguna, pues advirtió que la existencia de casos positivos en una ciudad no implican de suyo una afectación y trasgresión inmediata a todos los habitantes del territorio, y menos que pueda endilgarse prematuramente responsabilidades sin ningún soporte fáctico ni jurídico, y basado en suposiciones alejadas de la realidad.

Por otro lado, sostuvo que el accionante carece de legitimación en la causa por activa para obtener la protección del derecho al ambiente sano, pues éste al encontrarse dentro de los “*derechos colectivos*”, es claro que su titular radica en la sociedad y no en un individuo particular, de manera que, el señor Guerrero no se encuentra facultado para promoverla, afirmando además la carencia de interés para propiciar el presente mecanismo para la protección de derechos de terceros. En tal sentido, advirtió que los mecanismos de protección que proceden para invocar derechos colectivos corresponden a la acción popular con un carácter preventivo, y la acción de grupo, de contenido patrimonial.

Finalmente afirmó que no se configuró conducta reprochable a los accionados como vulneradores de los derechos fundamentales proclamados por el actor, así como tampoco se vislumbró la conducta censurable que afecte la salud del accionante en particular y que en consecuencia afecte su vida.

Por los anteriores motivos, declaró improcedente la acción de tutela elevada por el señor Carlos Alberto Guerrero de cara al amparo de los derechos a la salud y vida, así como la falta de legitimación en la causa por activa en cuanto al derecho a un ambiente sano.

II. DE LA IMPROCEDENCIA DE LOS ARGUMENTOS RECURRIDOS EN LA IMPUGNACIÓN:

Quedó demostrado en suficiencia y así lo aseveró la Juez de Primera Instancia, que en el caso particular no se evidencia la existencia de ningún tipo de perjuicio y menos con connotación de irremediable, presupuesto *sine-queanon* para ejercer la acción de tutela, toda vez que de los hechos no se deduce cuál es la conducta censurable que afecte el derecho fundamental a la salud del accionante y que como consecuencia comprometa su vida, así como las reclamaciones apuntaron a la protección colectiva de toda la población del Departamento de Arauca, por lo que resulta evidente además la falta de legitimación por activa para procurar la protección derechos de terceros o ajenos.

Siendo además importante precisar, en todo caso, que no se acreditó conducta alguna que sea imputable a mi representada como vulneradora de los derechos fundamentales del accionante, por cuanto no se evidenció cuál es la conducta imputable a OxyCol que le impida acudir a los servicios de salud y que como consecuencia de ese impedimento pueda comprometer su vida.

En este sentido, se reitera, las pretensiones del escrito de tutela e impugnación en su mayoría se encuentran dirigidas a las autoridades nacionales, y en lo que atañe a mi representada, se trata de solicitudes sin ningún respaldo legal o constitucional, que por la misma razón resultan inadmisibles tal como acertadamente lo señaló el *a quo*. En efecto, lo que pretende el actor frente a mi representada, es que se ordene que se abstenga de importar trabajadores para su operación directamente o a través de contratistas; que participe económicamente con las acciones y medidas sanitarias que adelante la UAESA y la Secretaría de Salud Municipal; que establezca acciones coordinativas con la UAESA para prevenir la llegada de personas contagiadas y que se abstenga de contratar personas que residan fuera del departamento, incluyendo en este ítem a los trabajadores de contratistas.

Estas pretensiones, que se reitera, no tienen ningún fundamento normativo, se formulan además sobre una premisa fáctica errónea, cual es que presuntamente el Covid19 habría arribado a la ciudad de Arauca por la actividad de **OxyCol**, quien según la afirmación del accionante habría desconocido preceptivas legales explícitas y asumido conductas inseguras. Así, y dadas las afirmaciones temerarias contenidas en la acción de tutela y en el escrito de impugnación, además de los argumentos de improcedencia ya expuestos, se hace necesario para claridad del Despacho realizar las siguientes precisiones, que en todo caso fueron igualmente expuestas en el trámite de primera instancia, a saber:

- A. El Gobierno Nacional ordenó el aislamiento obligatorio de todas los habitantes en el territorio nacional desde el pasado 24 de marzo, medida que se encuentra extendida en la actualidad hasta el próximo 1 de julio del 2020¹.

No obstante, y tal como lo sostuvo ante la juez de primera instancia, de la orden de aislamiento fueron exceptuadas ciertas actividades, entre ellas, las que corresponden al objeto social de **OxyCol**, así:

“26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (...) (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP- (...)”²

En este sentido, mi representada, en cumplimiento de las disposiciones legales que no solo permiten sino que obligan a que los servicios mantengan su continuidad dada su naturaleza esencial y de vital importancia para el país, adoptó todos los protocolos y medidas de seguridad necesarios para evitar el contagio y la propagación del virus Covid19, protocolos aplicables no

¹ Los Decretos mediante los cuales se ha declarado y ampliado la medida de aislamiento preventivo social obligatorio son: Decreto 457 de 2020 expedido el 22 de marzo del 2020 ordenó dicha medida desde el 25 de marzo de 2020 hasta las 00:00 am del 13 de abril del 2020; Decreto 531 de 2020 expedido el 8 de abril del 2020 amplió la orden previamente referida del 13 al 27 de abril de 2020, el Decreto 593 del 2020 expedido el 24 de abril del 2020 prorrogó la medida de aislamientos desde el 27 de abril hasta las 00:00 del 11 de mayo de 2020, el Decreto 636 de 2020, prorrogó la medida de aislamiento entre el 00:00 del 11 de mayo hasta las 00:00 del 25 de mayo de 2020 y el Decreto 749 de 2020 que actualmente se encuentra vigente prorrogó la medida de aislamiento entre las 00:00 del 1 de junio de 2020 hasta las 00:00 del 1 de julio de 2020.

² Numeral 25 del artículo 3° del Decreto 457 de 2020; numeral 28 del artículo 3° del Decreto 531 de 2020, numeral 28 del artículo 3° del Decreto 593 de 2020; numeral 29 del artículo 3° del Decreto 636 de 2020 y numeral 26 del artículo 3° del Decreto 749 de 2020.

solo a sus trabajadores, sino armonizados con los protocolos de bioseguridad de las empresas contratistas como empleadores del personal que presta sus servicios en el campo.

En efecto, **Oxycol** ha construido e implementado los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, los cuales son permanentemente actualizados con el fin de que sean más robustos y se ajusten a los dinámicos entornos regulatorios. Este trabajo constructivo ha sido adelantado en conjunto con los contratistas, pues es claro que tanto mi representada como las sociedades que hacen parte de la cadena de producción tenemos un objetivo común, que es la seguridad y salud de todas las personas.

Los protocolos de bioseguridad prevén no solo la actividad propia de la operación dentro del campo y el manejo de eventuales casos sospechosos, sino el ingreso y salida desde y hacia los hogares de los trabajadores, e incluso medidas de seguridad en el entorno personal de estos últimos al regresar a casa.

Vale la pena poner de presente que, si bien mi representada ha dado cumplimiento estricto a lo previsto en las disposiciones legales que regulan el contenido de los protocolos de bioseguridad, y puntualmente a la Resolución 666 de 2020, con anterioridad a la misma ya había extremado las medidas necesarias para garantizar no solo un ambiente de trabajo seguro, sino también para evitar el contagio y la propagación del virus Covid19. Es así como una de las medidas más importantes implementada desde mediados de abril de 2020, lo fue la realización de pruebas moleculares para detectar el Covid 19 al 100% de las personas que pretendían ingresar a los Campos Petroleros de las operaciones de OXYCOL en Arauca, y por supuesto, al 100% de las personas que ingresaran con este propósito al Departamento de Arauca.

Lo anterior evidencia que las acciones que adelantó y adelanta mi representada van más allá del simple cumplimiento de la norma, pues genuinamente buscan el bienestar de la comunidad. Tal como es de conocimiento del Juzgado, únicamente con el Decreto 048 de 2020 proferido el 11 de mayo del mismo año, la Gobernación de Arauca estableció la obligación de llevar a cabo pruebas de PCR a las personas que pretendan ingresar al Departamento para laborar. Es decir, mi representada prácticamente un mes antes del nacimiento de la obligación, adoptó la determinación de adelantar por su cuenta, con expertos, las pruebas moleculares necesarias para la detección del Covid19 en las personas que como se indicó, fueran a ingresar al Campo.

Es así como en el mes de abril fue contratado Colcan -laboratorio avalado por el Instituto Nacional de Salud- para llevar a cabo con celeridad los exámenes moleculares necesarios a personas asintomáticas. Este aspecto es importante, no solo porque el Gobierno Nacional dado el poco número de test disponibles para el país, únicamente llevaba a cabo exámenes en personas con sintomatología, sino que los exámenes contratados por **OxyCol** con Colcan son mucho más rápidos por el volumen de muestras, contando con los resultados en un tiempo máximo de 72 horas.

Siendo del caso precisar que, tanto los trabajadores de mi representada como los de los contratistas, hasta tanto no cuenten con el resultado que acredite que no son portadores del virus Covid19, no solo no pueden ingresar a Campo, sino que deben permanecer aislados como medida preventiva.

- B.** Se reitera que, si bien el resultado positivo para Covid19 arrojado ante la muestra llevada a cabo al trabajador del contratista de mi representada fue el primero reportado en la ciudad de Arauca, no puede ser visto como el paciente 0 en ese departamento, en tanto el primer caso se trató de un menor de 6 meses, conforme se indicó y acreditó en la contestación a la acción de tutela en

primera instancia. En todo caso, ninguna responsabilidad puede endilgarse a mi representada por el resultado positivo de la prueba al trabajador de una empresa contratista, cuando y como se ha destacado en apartes anteriores, **OxyCol** ha adoptado todas las medidas a su alcance, incluso mucho más allá de los lineamientos legales, luego el resultado positivo de una persona que no alcanzó a ingresar al campo petrolero para la prestación de sus servicios y que se mantuvo aislado siguiendo los lineamientos correspondientes, claramente no tiene relación causal de ningún orden con la adopción de tales medidas.

Por otra parte, es importante reiterar lo indicado ante la Juez de Primera Instancia, referente a que **OxyCol** y sus contratistas han privilegiado la contratación de la mano de obra calificada y no calificada, disponible en el territorio, y que aplicamos a cabalidad lo establecido en la legislación laboral colombiana y el Servicio Público de Empleo. Así mismo, tenemos procedimientos internos que vigilan el cumplimiento de la normatividad laboral vigente. Las cifras de empleabilidad de **OxyCol** y sus contratistas en la operación de Llanos Norte, son las siguientes: (i) Mano de obra no calificada: 100% araucana y (ii) Mano de obra calificada: superior al 65% araucana.

En ese orden, dado que la persona contagiada a quien hace referencia el accionante en su escrito de tutela no es trabajador de mi representada, es de precisar que de las averiguaciones llevadas a cabo por **OxyCol** con la empresa contratista, pudimos conocer que su trabajador se desplazó hacia el municipio de Arauca en un vehículo particular, con las condiciones de asepsia y seguridad correspondientes, debiendo así cumplir con el protocolo de bioseguridad que para el efecto tiene adoptado su empleador, protocolo que se encuentra estructurado de manera armónica con la operación propia de mi representada.

Así mismo y de acuerdo con la información que nos fue suministrada por Sodexo SA, el cargo que desarrolla el trabajador contagiado es un cargo calificado, habiéndose dado cumplimiento a lo normado en el Decreto 1668 de 2016 en lo que hace referencia a la búsqueda de mano de obra local, con la priorización del municipio correspondiente al área de influencia, municipios limítrofes y municipios que hacen parte del Departamento, sin haber encontrado a nadie con el perfil calificado, razón por la cual la búsqueda se amplió a nivel nacional.

En consecuencia, es claro que mi representada ha adoptado todas las medidas de bioseguridad con estricto apego no solo a la ley, sino a la finalidad de conservar la salud de las personas.

- C. Ahora bien, con respecto a la petición que realiza el accionante referente a suspender los vuelos charters desde cualquier ciudad de Colombia al aeropuerto Santiago Pérez Quiroz y a cualquier ciudad del departamento de Arauca, es del caso reiterar, tal como se manifestó ante el juez de primera instancia, que de acuerdo con los Decretos en los que se ha definido y extendido la medida de aislamiento obligatorio preventivo, se encuentra exceptuada de esta medida la operación aérea y aeroportuaria, tratándose de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía y caso fortuito o fuerza mayor.

En este sentido, y como es de conocimiento del Juzgado de Primera Instancia y ahora ante este Honorable Tribunal, el campo petrolero de Caño Limón se encuentra ubicado en el Departamento de Arauca, habiendo entre el Campo y la ciudad de Bogotá una distancia de aproximadamente 700 kilómetros. Cuando los trabajadores de mi representada o de los contratistas deben desplazarse hacia o desde el Campo Petrolero y hacia o desde un lugar con una distancia significativa, mientras haya la disponibilidad necesaria, ese desplazamiento se lleva a cabo en un charter privado, por supuesto, con la previa autorización de la Aeronáutica Civil y el

cumplimiento de los protocolos legales y de seguridad necesarios tal y como quedó demostrado y como se reitera.

En efecto OxyCol implementó un protocolo de bioseguridad que incluye el seguimiento de las condiciones de salud mediante el diligenciamiento de declaraciones de salud antes y después del vuelo con el lleno de los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la toma de muestras para el examen molecular de Covid19 48 horas antes del vuelo y la publicación de los resultados de 24 a 12 horas antes del vuelo y, actividades de tamizaje que incluyen entre otras, la toma de temperatura e instrucciones de buenas prácticas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de limpieza, desinfección y esterilización de la aeronave y equipaje; la realización de pruebas a la tripulación, y el suministro y adecuado uso de los elementos de protección personal para todas las personas que participan en la operación.

Cualquiera que sea el medio de desplazamiento como se indicó en las intervenciones de OxyCol en primera instancia, y para todos los trabajadores residentes en Arauca, las pruebas moleculares para detección de Covid19 son igualmente practicadas, adelantándose el siguiente procedimiento: la toma de la muestra se lleva a cabo en Bogotá, Bucaramanga o Arauca, pues son los únicos lugares donde se cuenta con equipo especializado, y desde las dos últimas ciudades son remitidas a Bogotá para su procesamiento. Para la toma de muestras a los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas, su empleador se encarga de ubicarlos en los laboratorios designados para el efecto, y desde ese laboratorio, las pruebas son remitidas a la ciudad de Bogotá.

Conforme a lo anterior, aceptar la tesis planteada por el accionante en cuanto a la supuesta violación legal que se configura por la utilización de vuelos charter, no tiene ningún asidero, no solo por las razones expuestas en precedencia, sino porque la totalidad de los vuelos realizados han contado con los permisos necesarios de la Aeronáutica Civil, que es la autoridad competente para concederlos.

Siendo del caso precisar que a las personas que ingresan y salen vía aérea se les realizan test de temperatura antes de abordar el avión correspondiente, las aeronaves son desinfectadas, dándose cumplimiento a los protocolos aeronáuticos establecidos. Así mismo y también en cumplimiento a lo ordenado en el decreto 448 del 11 de mayo de 2020 de la Gobernación de Arauca, se han tomado las pruebas PCR correspondientes con obtención de resultados negativos antes de que las personas se dirijan al Departamento de Arauca.

D. Finalmente, es de precisar tal como mi representada lo puso en conocimiento de la Juez de Primera Instancia a través del comunicado que reposa en el expediente de la presente acción de tutela, remitido el pasado 11 de mayo al doctor Facundo Castillo- Gobernador de Arauca-, **OxyCol** ha adoptado un programa de responsabilidad social durante la coyuntura, denominado “Plan Solidario”, iniciado en marzo pasado para abordar algunas de las necesidades potenciales más urgentes y desafiantes en Arauca, el cual tiene dos componentes:

- (i) Asistencia alimentaria: A la fecha se han entregado mercados a aproximadamente 3800 familias araucanas vulnerables (madres cabeza de familia, personas de la tercera edad y familias con algún miembro discapacitado).
- (ii) Asistencia al sistema de salud: Oxycol ha adelantado gestiones para complementar la capacidad del sistema de salud en Arauca para enfrentar los desafíos de la pandemia COVID-19. Algunos de los elementos de este componente incluyen:
 - Adecuación, dotación y servicio de enfermería y médico del centro de salud comunitario en la vereda de Las Nubes (municipio de Arauca), para atender las

necesidades médicas de los pacientes y compartir información sobre buenas prácticas de salud. El centro abrió sus puertas el 20 de abril. Cualquier paciente que presente síntomas de COVID-19 será transportado de inmediato a un hospital equipado para la respectiva evaluación. Así mismo, hemos fortalecido el servicio médico en el Centro de Salud de La Pesquera.

- Donación de kits de equipos de protección médica para los profesionales de la salud de Araucanía que incluyen: 450 uniformes anti fluidos, 400 tapabocas N95, 70 gafas de seguridad, 10.000 pares de guantes quirúrgicos, 1.000 litros de antibacterial, 1.000 litros de jabón líquido, 2.000 unidades de gorros desechables, 1.000 unidades de zapatos desechables y 1.000 batas médicas desechables (en progreso).
- Donación de equipos de protección personal para los miembros de la Policía Nacional en Araucanía, incluyendo: 80 cajas de guantes de seguridad 4.000 tapabocas y 6 termómetros infrarrojos.
- Donación de filtros de agua potable a 10 centros de salud y comunitarios en Araucanía y Araucanía (en progreso).
- A la fecha de interposición de la tutela mi representada ya había ordenado el equipo de última generación para pruebas moleculares de reacción en cadena de polimerasa, para aumentar la amplitud de las pruebas disponibles en Araucanía para personas con y sin síntomas de COVID-19 para donar a la UAESA. Esta máquina efectivamente fue entregada a la UAESA el 24 de junio de 2020 y permitirá que se duplique la capacidad diaria de procesamiento de pruebas para Covid-19 por parte del laboratorio de la UAESA, tal y como se acredita con la publicación efectuada por la UAESA en sus redes sociales y como quedó registrado por los diferentes medios de comunicación, cuyas referencias y capturas de pantalla se anexan como prueba de esta intervención.
- A la fecha de interposición de la tutela mi representada ya estaba en coordinaciones con la UAESA relacionadas con la oportunidad de donar ventiladores para la atención de la contingencia.

En virtud de lo anterior, es del caso precisar que contrario a lo manifestado por el accionante en su escrito de impugnación y tal como quedó soportado ante el *a quo*, **OxyCol** ha venido fortaleciendo sus esfuerzos de manera estrecha y coordinada con la UAESA y con las autoridades competentes, con quienes ha estado discutiendo diversas iniciativas como parte del mencionado programa de gestión social durante la coyuntura.

Teniendo en cuenta lo anterior, aceptar lo que peticiona e insiste el accionante enmarcado en un concepto de principio de precaución errado, implicaría la necesidad de prohibir en el municipio y en el departamento toda actividad de las exceptuadas, incluida, entre otras, aquellas de transporte y abastecimiento de productos de primera necesidad, e incluso, la prohibición de las actividades exceptuadas que desarrollan personas foráneas o locales pues el riesgo de contagio no sería distinto en uno o en otro caso, máxime si se tiene en cuenta que para el momento de la presentación de la demanda existía una persona (por lo menos conocida) contagiada con el virus, desde antes, incluso, al empleado de la empresa contratista que fue diagnosticado. Lo anterior, además, iría en contra de lo establecido en el Decreto 636 de 2020 que dispone que cualquier prohibición de actividades exceptuadas debe contar con el aval del Ministerio del Interior.

El planteamiento del accionante relacionado con el principio de precaución, no se puede considerar de manera aislada frente la actividad petrolera sin dejar de analizar esas otras actividades que asimismo requieren de personas de afuera de Araucanía, que también están exceptuadas por un decreto con carácter de ley de la máxima autoridad de policía y respecto de las cuales, en contraste a lo que ocurre con mi

representada, se desconoce si se les ha aplicado o exigido con anterioridad la prueba de Covid 19, a lo menos cuando las personas que desarrollan esas otras actividades se encuentran en Arauca.

En consecuencia, y tal como lo señaló el juez de primera instancia, al no existir un perjuicio irremediable y al no haberse probado la presunta violación de derecho fundamental alguno del accionante, no resulta procedente la acción de tutela.

Así las cosas, reiteramos que la acción de tutela de la referencia no es procedente, pues queda suficientemente demostrado que mi representada no ha incurrido en violación alguna de los derechos del accionante, debiéndose en ese sentido confirmar el fallo proferido en primera instancia como respetuosamente lo solicito al H. Tribunal.

Del H. Tribunal,

Atentamente,



JUAN FERNANDO ACEVEDO LIZCANO

Apoderado General Suplente

Bogota-notificaciones-judiciales@oxy.com

Anexo lo anunciado